Los atentados de Al Qaeda, que sembraron el desconcierto y el miedo en la sociedad española, despertaron luego una inmensa oleada de solidaridad. / EFE

Los ciudadanos votarán mañana en las elecciones generales **conmocionados, una vez más,** por el atentado de una organización terrorista

Ocurrió hace cuatro años

J. MUÑOZ BILBAO

Los ciudadanos volverán a votar mañana en unas elecciones generales bajo el impacto emocional de un acto terrorista. Si la masacre islamista del 11-M fue perpetrada un jueves, tres días antes de los comicios de 2004, dos pistoleros de ETA han asesinado al ex concejal Isaías Carrasco un viernes, a 48 horas escasas de la cita con las urnas. La magnitud de ambos atentados es distinta –los electores difícilmente olvidarán la carnicería del 11-M y las horas febriles que siguieron–, pero las dos actuaciones criminales comparten un rasgo esencial: han adelantado el final de la campaña de forma abrupta. Con 191 víctimas mortales de Al Qaeda o con una sola de ETA, la jornada de reflexión se ha transformado en una jornada de duelo.

La conmoción no sólo se palpaba ayer en las condenas, sino en las primeras reacciones de quienes las formularon: en el repentino gesto sombrío que compuso José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de un mitin en Málaga; en la indignación contenida de Mariano Rajoy al convocar de forma apresurada a los informadores en la sede de la calle Génova; en el raudo desplazamiento del lehendakari Ibarretxe al hospital de Mondragón donde se habían reunido los socialistas vascos.

Los renovados llamamientos a la movilización social contra ETA coinciden con el cuarto aniversario de las manifestaciones que reunieron a más de once millones de personas para repudiar a la banda terrorista vasca, a la que el Gobierno de Aznar atribuyó inicialmente la matanza del 11-M sin atisbo de duda. Aquel día, cuando aún no habían transcurrido seis horas desde el atentado, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, advertía contra «los miserables que intentan hacer dudar sobre los responsables de la tragedia».

Los dos días posteriores desbarataron esa hipótesis. El ritmo de los acontecimientos lo marcaron las evidencias sobre la autoría islamista, las críticas del PSOE a la política informativa oficial, el cruce de miles de SMS y las protestas ante las sedes del Partido Popular. Una catarata de noticias que desembocó en el vuelco electoral del 14 de marzo, el mayor en la historia de la democracia. Los populares, que gozaban de mayoría absoluta en el Congreso, apenas obtuvieron 148 escaños, mientras que el PSOE se iba hasta los 164. Aquellas jornadas incidieron decisivamente en la legislatura que ahora termina, en la que los populares han puesto en duda la legitimidad de la victoria socialista y se apoyaron en el sumario y el macrojuicio del 11-M para desgastar al Gobierno de Zapatero.

Cadena de explosiones

En realidad, al amanecer de aquel fatídico día nadie podía presagiar un horizonte político tan convulso. Repentinamente, entre las 7.39 y las 7.42 horas, las estaciones madrileñas de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia se vieron sacudidas por la explosión de varias bombas escondidas en mochilas, y activadas por teléfonos móviles. Fue el atentado más mortífero que se recordaba en España –191 fallecidos y 2.062 heridos que viajaban en cuatro trenes de cercanías–, una tragedia para la que la sociedad española no estaba preparada.

Los partidos suspendieron de inmediato la campaña electoral, y el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo tomó las riendas de la investigación, que avanzó contrarreloj. El desconcierto y el miedo se instalaron en los ciudadanos, mezclados con sentimientos espontáneos de solidaridad: mientras cientos de madrileños acudían a los hospitales para donar sangre, los mandatarios políticos arremetían contra ETA. Sólo el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se resistía a aceptar la autoría de ETA «ni como hipótesis» y apuntaba a «la resistencia árabe».

Los rescoldos provocados por el rechazo a la invasión de Irak, que había movilizado a decenas de miles de españoles contra el Gobierno de Aznar, se avivaron desde los primeros momentos; pero el Gobierno se apresuró a acallar las sospechas de un ataque islamista. El Ministerio de Exteriores se encargó de asegurar al cuerpo diplomático acreditado en España que ETA era la responsable de la masacre y, la misma tarde del atentado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba una condena contra la banda.

Los versículos del Corán

Sin embargo, apenas dos horas después, el ministro Acebes informaba de que la Policía había encontrado en Alcalá de Henares siete detonadores y una cinta con versículos del Corán dentro de una furgoneta. Un grupo islamista no tardó en responsabilizarse del atentado en nombre de Al Qaeda, aunque Acebes no concedió credibilidad al comunicado. El Ejecutivo insistió en que la principal línea de investigación apuntaba a ETA, una postura que también mantuvo al día siguiente, después de que la Policía descubriera y desactivara una bomba que estaba oculta en una mochila y que había sido recogida en la estación del Pozo.

Los partidos suspendieron de inmediato la campaña electoral

Once millones de personas se echaron a las calles contra el terrorismo

La tarde del 12 de marzo, once millones de personas se echaron a la calle contra el terrorismo en las principales capitales españolas. Sólo en Madrid se congregaron dos millones de ciudadanos, encabezados por el Príncipe, las Infantas y los primeros ministros de Francia, Portugal e Italia. La convocatoria de Barcelona fue secundada por un millón de personas, a las que el Gobierno de Aznar continuaba informando de que ETA era la principal sospechosa.

Sin embargo, las cancillerías extranjeras y la prensa internacional desmentían esa hipótesis. Bastaba con entrar en Internet para comprobarlo. El 13 de marzo, en plena jornada de reflexión, se produjeron importantes movilizaciones ante los locales del PP en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Miles de españoles recibieron SMS que acusaban al Ejecutivo de ocultar información.

Al caer la noche, Acebes comunicaba la detención de tres ciudadanos marroquíes –entre ellos Jamal Zougam– y dos indios. Poco después, añadía que un supuesto portavoz de Al Qaeda se había atribuido la masacre de Madrid. Simultáneamente, la Junta Electoral Central calificaba las concentraciones contra el PP como «contrarias a la regulación electoral».

Los colegios electorales abrieron con normalidad a la mañana siguiente. No se registraron incidentes y la participación se disparó hasta el 77,2%. Los ciudadanos votaron con el horror de las estaciones de Madrid grabado en sus mentes. Una sensación que, en cierto modo, se repetirá mañana, aunque esta vez no se trata de unos trenes destruidos, sino del rostro de un ex concejal socialista.